



“Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA PONENTE
ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05001-31-03-018-2021-00014-01
Proceso	Ejecutivo
Demandantes	Carlos Arturo González Villa
Demandado	Rafael Mario Villa Moreno
Procedencia	Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Sinopsis	En materia de subrogación legal impera el principio de taxatividad, para que ella opere debe aparecer expresamente consagrada en el Código Civil o en normas de carácter especial. Operada la subrogación se traspasa a quien pagó todos los derechos, acciones y privilegios del antiguo acreedor contra cualesquiera terceros obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.
Aprobación.	Proyecto aprobado en sesión virtual del día de 2023.
Rdo. Interno	065-21
Sentencia n°	042-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, el 15 de julio de 2021, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA, en contra de RAFAEL MARIO VILLA MORENO.

1. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Manifestó la parte ejecutante que Carlos Arturo González Villa y Rafael Mario Villa Moreno suscribieron el primero de enero de 2018, de manera incondicional y solidaria cuatro pagarés a favor del señor Luis Fernando Vásquez Botero, por un valor total

\$500.000.000; y uno a favor de la sociedad Vásquez García e Hijos S.A.S. por valor de \$63.000.000.

Expuso que dichos títulos valores fueron respaldados mediante hipoteca sobre los bienes inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias números 001-883566 y 001-883546, los cuales eran de propiedad de Carlos Arturo González Villa y su esposa Natalia Gaviria, porque posteriormente fueron transferidos a sus hijos María José, Miguel y Pedro González Gaviria.

Narró que el señor Luis Fernando Vásquez Botero inició proceso ejecutivo hipotecario en contra de sus hijos María José, Miguel y Pedro González Gaviria, con fundamento en los pagarés, tal y como lo autoriza la ley. Que, para terminar el mencionado proceso y finiquitar estas obligaciones, el señor Carlos Arturo González Villa tuvo que desembolsar la cifra de \$661.340.726, por concepto de capital e intereses, además, \$31.844.893, por costas y agencias en derecho.

Señaló que estos dineros fueron pagados únicamente por el deudor solidario Carlos Arturo González Villa, tal y como consta en los paz y salvo emitidos por los señores Luis Fernando Vásquez Botero y Rafael Alberto Vásquez Botero, sin que el señor Rafael Mario Villa Moreno desembolsara suma alguna a pesar de los requerimientos que se le realizaron, por lo que, según los artículos 1666 al 1671 del Código Civil, le asiste el derecho de subrogación del acreedor original.

Refirió que, con base en lo anterior, al señor Carlos Arturo González Villa le asiste derecho a cobrar al señor Rafael Mario Villa Moreno la suma de \$281.500.000 por concepto de capital, más la suma de \$49.170.363 por intereses relacionados con los mencionados pagarés, que no es otra cosa que el 50% del total pagado, pues el otro 50% lo debía asumir el ahora demandante.

Con fundamento en lo reseñado, solicitó el ejecutante se librara mandamiento de pago a su favor y en contra del demandado Rafael Mario Villa Moreno, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$281.500.000), por concepto del 50% del pago por él realizado respecto de los pagarés antes enunciados; por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$49.170.363), por los intereses generados por los títulos valores desde que se generó la deuda hasta el momento en que se efectuó el pago de la obligación, esto es, ocho de noviembre

de 2019, más los intereses moratorios causados sobre el capital, liquidados a la tasa máxima legal permitida desde el ocho de noviembre de 2019 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO

El juzgador de primera instancia libró la orden ejecutiva en proveído del 16 de febrero de 2021, por la suma de \$281.500.000 como capital, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida, desde el ocho de noviembre de 2019 hasta la verificación de su pago, más \$49.170.363, correspondiente al 50% del pago de intereses efectuado por el demandante. (Fol. 08, Cdo. Digital Ppal.).

1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.

Una vez notificado el ejecutado de la orden de apremio, dentro del término legal propuso los siguientes medios de defensa:

1.3.1. AUSENCIA DE TÍTULOS EJECUTIVOS QUE PERMITAN POSTULAR UN PROCESO EJECUTIVO. Señalando que, cuando un título valor es pagado por su creador o por uno de sus creadores, la obligación principal contenida en este se extingue, pues el derecho ínsito al título se ha realizado plenamente. Que, como en el libelo se afirma, con o sin razón, que el demandante Carlos Arturo González, suscriptor conjuntamente de los pagarés, pagó el importe de todos los cinco títulos valores, tales documentos no son fuente de derechos ni de obligaciones, pues se agotaron los derechos de quienes podrían postular su pago, y obviamente las obligaciones de quienes deberían efectuarlo.

1.3.2. AUSENCIA DE ACCIÓN CAMBIARIA POR PARTE DE CARLOS ARTURO GONZÁLEZ. Expuso que, en virtud del endoso que se consignó en los títulos valores que se presentaron para el cobro, los cuales fueron endosados a Carlos Arturo González, no procede por parte del mismo el ejercicio de acción cambiaria contra Rafael Mario Villa, puesto que el endoso no lo convierte en tenedor legitimado del título a través de una cadena de endosos.

Aseveró que el otorgante o uno de los otorgantes del título que ha pagado la obligación principal contenida en el mismo, no está legitimado en causa como tenedor legítimo del título valor para ejercer la acción directa, pues esa solo es predicable cuando dicha acción la ejerce un tenedor legitimado por la cadena de endosos; no siendo posible que quien ostenta la calidad de otorgante del pagaré y so pretexto de un endoso, postule la acción directa contra otro otorgante del mismo.

1.3.3. AUSENCIA DE SUBROGACIÓN DE ACCIÓN POR PARTE DE CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA EN LAS ACCIONES CAMBIARIAS CUYO EJERCICIO LE HUBIERA CORRESPONDIDO A LUIS FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO Y A VÁSQUEZ GARCÍA E HIJOS S.A.S. Con fundamento en que, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 1579 del C. Civil, la subrogación no es procedente si uno de los deudores solidarios no se encuentra concernido por el negocio para el cual había sido contraída la obligación solidario; lo que equivale a decir que, si uno de los deudores solidarios no reportó beneficio alguno de dicho negocio, dicho deudor solidario no sería responsable del pago de la cuota o parte que en principio le correspondería pagar como tal en relación con la cuantía misma del negocio.

Sostuvo que, de la lectura del artículo 632 del C. de Comercio, se colige que en materia de títulos valores, cuando un deudor solidario paga el importe del título valor, dicho deudor solidario no se subroga de acción cambiaria alguna, sino que lo único que puede ejercer es una acción distinta de la cambiaria.

Adujo que, la acción procedente que debió ventilarse fue la declarativa, lo cual es ajeno al proceso ejecutivo, de tal manera que se verificara la cuota o parte que al deudor solidario Rafael Mario Villa Moreno le habría correspondido pagar, pero siempre y cuando hubiere estado involucrado por cada uno de los negocios jurídicos que dieron origen a la expedición de cada uno de los pagarés.

1.3.4. VIOLACIÓN EN EL MANDAMIENTO DE PAGO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEL ARTÍCULO 430 IBÍDEM. Porque no se debió dictar mandamiento de pago alguno, toda vez que las pretensiones, pese a no excluirse entre sí, no aluden de manera particular y concreta a cada uno de los pagarés que se presentan al cobro. En su sentir, las pretensiones debieron haber sido formuladas separadamente respecto del pago que González Villa realizó en relación con la obligación solidaria contenida en cada uno de los pagarés, haciendo alusión y probando cada uno de los

presupuestos requeridos, para que el deudor solidario pueda solicitar el pago de una determinada suma de dinero del otro.

1.3.5. AUSENCIA DE PRUEBA POR PARTE DEL DEMANDANTE CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA DEL PAGO DE SUMA ALGUNA POR CONCEPTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS 5 TÍTULOS VALORES, CON FUNDAMENTO EN LOS CUALES SE FORMULA LA PRETENSIÓN EJECUTIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA DEMANDA. Ya que en la demanda se afirma que Carlos Arturo González Villa fue quien pagó las sumas contenidas en los pagarés, sin embargo, se trata de un principio de prueba, más no una prueba efectiva, porque el pago lo pudo haber realizado otras personas o bien que dicha afirmación no sea necesariamente cierta. Manifestó que, si el mandamiento de pago se efectuó en el proceso ejecutivo hipotecario, se hizo frente Natalia, Pedro y Miguel González Gaviria, y que fue este el que terminó por pago total de la obligación, este solo podía ser imputable a dichos demandados.

Ahora, que, si una persona distinta a los destinatarios de la orden de apremio hubiera efectuado el pago, el proceso no debió terminar por pago, sino que, lo lógico hubiera sido que los demandantes hubieran desistido, con o sin la coadyuvancia de los demandados.

1.3.6. AUSENCIA DE PRUEBA POR PARTE DEL DEMANDANTE DEL CONCERNIMIENTO DE RAFAEL MARIO VILLA MORENO EN RELACIÓN CON LOS DIFERENTES NEGOCIOS JURÍDICOS QUE DIERON LUGAR A LA EXPEDICIÓN DE LOS DISTINTOS PAGARÉS. Ello con fundamento en el inciso 2º del artículo 1579 del Código Civil.

1.3.7. AUSENCIA DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES QUE SUPUESTAMENTE CONDUJERON A CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA A PAGAR INTERESES EN UNA CUANTÍA INDETERMINADA SOBRE LAS SUMAS A LAS CUALES ALUDEN LOS PAGARÉS. Teniendo en cuenta que no aparece en la demanda una discriminación y cuantificación de las sumas que supuestamente Carlos Arturo González Villa habría pagado por concepto de intereses, es decir, de frutos sobre el capital adeudado al tenor de los distintos títulos valores. Como consecuencia de ello, que la suma de \$49.170.363 que se pretende cobrar de intereses, no obedece más que a una afirmación de la parte demandante carente de toda prueba.

Con todo, deprecó la desestimación de las pretensiones de la demanda y se condenara en costas a la parte actora.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplidas las ritualidades propias para esta clase de asuntos, conforme las previsiones de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en audiencia celebrada el 15 de julio de 2021, profirió la decisión que selló la primera instancia, ordenando seguir adelante con la ejecución, al desestimar las excepciones de mérito propuestas por el demandado.

1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Dentro de la audiencia el apoderado de la ejecutada interpuso recurso de apelación y dentro de los tres días siguientes realizó los siguientes reparos:

Señaló que el juzgado de primera instancia incurre en un defecto sustantivo, al querer justificar el hecho de que su mandamiento de pago se extendió a aspectos disímiles a los que de acuerdo con los artículos 422 y 430 del C. General del Proceso debió haberse limitado.

Arguyó que si un deudor solidario supuestamente paga la totalidad de una deuda o pretende que otro y otros deudores solidarios le reembolsen la cuota que estos últimos han debido pagar, advirtiendo la subrogación legal, tal pretensión es ajena a los postulados de un proceso ejecutivo, la cual tiene como base la existencia de un título contentivo de una obligación clara, expresa y exigible. En su sentir, el despacho concluyó que Carlos Arturo González sí le había pagado las obligaciones cambiarias a Luis Fernando Vásquez, y que, en virtud de dicho pago, Rafael Mario Villa le adeudaba a este, determinada suma global de dinero por capital e intereses, lo que debió discutirse en el ámbito de un proceso declarativo.

Resaltó que en este asunto nos encontramos frente a una ausencia de título ejecutivo, porque si los títulos valores fueron pagados por Carlos Arturo González, no existe obligación respecto de los mismos y, por ende, no podía librarse la orden de apremio.

Reiteró además los argumentos presentados al momento de formular las excepciones de mérito.

Expuso que, el juez de primer grado erró al manifestar que como Carlos Arturo González pagó las obligaciones de los González Gaviria, se subrogó en la acción cambiaria que tendría Luis Fernando Vásquez contra Rafael Mario Villa en el porcentaje que a este último le correspondía pagar como deudor solidario, pues ignoró que el pago total o parcial que se efectuó, solamente lo subrogó en los derechos que el acreedor hubiere podido tener contra los González Gaviria.

Al momento de sustentar el recurso de apelación en segunda instancia, reafirmó lo indicado en primera instancia y enfatizó que Luis Fernando Vásquez y la Sociedad Vásquez García desembolsaron a cambio de la expedición de los pagarés base de recaudo ejecutivo, fueron remitidos directamente por Carlos Arturo González a Solución Maestra, sociedad en la que dicho dinero debió haber sido contabilizado como un crédito a favor de este, pues tanto demandante como demandado, cada uno por su lado, contrajeron obligaciones para financiar la mencionada empresa. Es decir que los dineros objeto del mutuo cuyo cobro por subrogación se hace en el proceso ingresaron al patrimonio de Solución Maestra S.A.S. por cuenta del señor González Villa.

CONSIDERACIONES.

2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo singular, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.2. PROCESOS EJECUTIVOS. Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art.

422 del C. G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentaron cinco pagarés, pretendiéndose ejecutar la obligación contenida en los mismo, más los intereses moratorios causados, respecto de los cuales, la parte demandada alegó la ausencia de títulos ejecutivos que permitan postular un proceso ejecutivo, ausencia de acción cambiaria por parte de Carlos Aturo González, ausencia de subrogación de acción por parte de Carlos Arturo González villa en las acciones cambiarias cuyo ejercicio le hubiera correspondido a Luis Fernando Vásquez Botero y a Vásquez García e hijos S.A.S., entre otras.

2.3. DE LA SUBROGACIÓN. La subrogación está definida en nuestra legislación, como la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. En virtud de ella se traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, tanto contra el deudor principal, como contra cualquier obligado solidario o subsidiario.

Como en la subrogación el pago lo hace un tercero, no se extingue la obligación con respecto al deudor, este queda ligado en favor de la persona que vino a ocupar el lugar del acreedor. Se trata de un pago de naturaleza especial, donde el deudor no queda liberado porque no es hecho por él, y la obligación subsiste en favor de ese tercero.

La subrogación presenta dos modalidades: legal y convencional. La primera modalidad es la que reviste más interés por cuanto la sustitución del acreedor por quien paga no se realiza en virtud de un convenio entre estos, sino que ella opera por el solo ministerio de la ley, de pleno derecho, a pesar del acreedor. Esta es una institución excepcional, de interpretación restrictiva, solamente opera en los casos en que la ley expresamente la consagra.

Las especies de subrogación legal pueden dividirse en dos grandes grupos, el primero comprende aquellas situaciones en que el tercero que paga está directa (el codeudor solidario, el fiador o el codeudor. Ordinal 3° art. 1668 C.C.) o indirectamente obligado al pago (el dueño de inmueble hipotecado para seguridad de una obligación ajena, el tercer poseedor, el comprador de inmueble hipotecado. Ordinal 2° art. 1668 y 2453

ibídem). El segundo grupo, comprende la hipótesis del pago hecho por quien no tiene ninguna clase de vinculación ni con el deudor, ni con el bien afectado al pago, o sea es un tercero completamente extraño a esa obligación (pago por otro acreedor, pago por heredero beneficiario, pago con consentimiento del deudor, préstamo para el pago. Ordinales 1°, 4°, 5° y 6° del art. 1668).

La hipótesis que concierne al caso que nos ocupa es la consagrada en el ordinal 3° del art. 1668 multicitado y es la subrogación que opera a beneficio:

“Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente.”

Al respecto, sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC5107-2021, del 15 de diciembre de 2021, MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo:

“...Cuando el pago lo consuma uno de los deudores solidarios su principal secuela es la extinción de la deuda y, por contera, la aniquilación de la solidaridad pasiva, en tanto sólo tenía repercusión en relación con el accipiens, no respecto de los deudores entre sí.

Es decir, el cumplimiento total de la prestación a favor del acreedor por uno de los deudores solidarios disipa tal solidaridad, radicada hasta entonces en hombros de todos los deudores, en razón a que a estos ya nada los ligará con aquel.

No obstante, tal cual se desprende del numeral 3° del artículo 1668 ejusdem, a favor «del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente» opera la subrogación legal, aun contra la voluntad del acreedor.

En este orden, la aludida extinción de la deuda desde el punto de vista del acreedor, resultado del pago realizado por quien hasta entonces era uno de los deudores solidarios, apareja otras consecuencias, esta vez únicamente entre quienes integraron el extremo pasivo de la obligación, como es la subrogación legal.

De allí que, en concordancia con el numeral 3° del artículo 1668 mencionado, el inciso inicial de la regla 1579 de la compilación legal en cita prevé que «[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.» (Resaltado impropio).

Traduce lo expuesto que el pago realizado por uno de los deudores solidarios a favor del acreedor inicial trae consigo una nueva obligación, pero sólo entre quienes conformaban el extremo pasivo de la primera

prestación, esta vez conjunta, es decir la que tiene por objeto una cosa divisible y existe a cargo de dos o más deudores o a favor de dos o más acreedores, en forma tal que cada deudor sea solamente obligado a su cuota o parte en la deuda y que cada acreedor apenas pueda pedir su parte o cuota en el crédito (art. 1568 y 1583).

Dicha novísima carga posee sus propias reglas, como que, por aplicación del inciso 2° del artículo 2325 idem, «[s]i la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales».

El ordenamiento jurídico presume, entonces, que la obligación asumida por varias personas es de interés de todas ellas y, por consecuencia, cada una está obligada a su pago por partes iguales.

Sin embargo, al tratarse de presunción legal admite prueba en contrario, al tenor de la regla 66 del mismo ordenamiento, puesto que «...se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias...» (Inciso 2°).

Así las cosas, al alcance de cualquier deudor está demostrar su cuota en el pasivo inicial, porque a esta se limitará la devolución que nació en su contra en la nueva prestación, surgida a raíz del pago cumplido por uno de los deudores solidarios o solvens.

Incluso, nada obsta que uno de tales obligados carezca de interés en el compromiso originario, porque realmente lo contrajo de forma solidaria en aras de garantizar el pago al acreedor, eventualidad en la que, como lo consagra el inciso 2° del artículo 1579 citado, «[s]i el negocio para el cual ha sido contraída la obligación, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores.» (Resaltó la Corte)...

2.4. LA APELACIÓN. La parte demandada, ante la falta de prosperidad de sus excepciones de mérito, presentó recurso de alzada, reiterando básicamente que: i) no se puede asumir que el demandado pagó el derecho contentivo en los pagarés aportados como base de recaudo, con base en el mandamiento de pago dictado por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, ii) no procedía la ejecución en este asunto, pues por tratarse de obligaciones pagadas por uno de los emisores de los pagarés, solo procedía el trámite de un proceso verbal, donde se pueda discutir el alcance de la solidaridad, iii) no se justipreció la prueba consistente es que el ejecutante envió todo el dinero que le fue entregado a cambio de los pagarés a la sociedad Solución Maestra y iv) de los pagarés base de ejecución no se vislumbra una obligación clara, expresa y exigible, por ende no hay título ejecutivo.

En el sub lite nos encontramos frente a un proceso ejecutivo instaurado por Carlos Arturo González Villa, donde se persigue el pago DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$281.500.000) y CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$49.170.363), correspondiente al 50% del pago único de capital e intereses, respecto de los cinco pagarés que fueron aportados, y que hace relación a la obligación contraída por este y el aquí demandado Rafael Mario Villa Moreno en favor de Luis Fernando Vásquez Botero.

Ello por cuanto, al interior del proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado ante el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, bajo el radicado 05001 31 03 017 2018 00699 00, el señor Carlos Arturo González Villa, en calidad de deudor solidario, realizó el pago de los pagarés aquí aportados, número 01 por valor de \$200.000.000, números 02, 03 y 04 por valor de \$100.000.000 cada uno y número 5 por la suma de \$63.000.000.

Ahora, de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia el adelantamiento del proceso antes citado, el cual tuvo como base de ejecución los aludidos títulos valores. El mandamiento de pago fue librado por proveído del 12 de diciembre de 2018 y se dictó sentencia el seis de septiembre de 2019, ordenando seguir adelante con la ejecución y pagar las obligaciones allí contenidas, con el producto del remate del bien hipotecado. Ante la solicitud presentada por el apoderado del ejecutante, quien informó que la obligación contenida en los pagarés había sido cancelada por los terceros demandados en el proceso y el deudor solidario de los mismos, esto es, señor Carlos Arturo González Villa, por auto del seis de julio de 2020, se decretó la terminación del proceso por pago total de la obligación y el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, en consecuencia, dispuso del desglose de los documentos base de recaudo con constancia de vigencia.

Conforme a ello, lo primero que debe resaltarse es que todas las actuaciones practicadas al interior del mencionado proceso son válidas, porque gozan de una presunción de legalidad, por ende, no pueden ser desconocidas hasta tanto se demuestre que van en contravía de la ley.

En ese sentido, debe indicarse que, al haberse indicado en el mencionado proceso por la parte ejecutante y por el Juzgado de conocimiento, este terminaba por pago

total de la obligación, ante la cancelación del crédito realizada por parte de un tercero, concretamente del señor Carlos Arturo González Villa, en su calidad de deudor solidario de los cinco pagarés aportados, merece ello toda credibilidad para la Sala.

Además, a ello se suma el certificado de paz y salvo expedido por el acreedor de los referidos títulos valores, donde de manera expresa señala que: “...*recibimos única y exclusivamente del señor CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$663.804.893) para el pago de los pagarés antes anunciados, así como para la terminación del proceso ejecutivo hipotecario de radicado 05001-31-03-017-2018-00699-00, el cual pretendía recaudar las sumas descritas en dicho títulos valores junto con sus intereses...*”.

En esa medida, con ello se verifica, contrario a lo afirmado por el demandado en este asunto, que el demandante sí fue quien efectuó el pago de las obligaciones que eran deudores solidarios, por tanto, resultaba procedente la subrogación legal en los términos que quedaron establecidos en los considerandos; es decir, como deudor solidario, al pagar la deuda, se subrogó en la posición del acreedor frente a su codeudor, en la parte o cuota que tenga este en la deuda.

Ello también quiere significar que, como quien canceló la obligación entra a ocupar o reemplazar la posición del acreedor, ante la subrogación acaecida, la acción pertinente es la cambiaria que se promueve mediante el proceso ejecutivo y no el proceso verbal, como lo pretende hacer ver la parte recurrente. El proceso con que cuenta un acreedor para exigir el pago de una obligación dineraria, lo es el ejecutivo, pues se trata de un derecho cierto y sobre el cual no versa ningún trámite de reconocimiento del mismo.

Y si se tiene alguna duda, el artículo 1579 establece que ...*El deudor que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalente al pago, **queda subrogado en la acción del acreedor** con todos sus privilegios y seguridades...*”, lo que implica que, como la acción que tiene el acreedor es la cambiaria a través del proceso ejecutivo, el codeudor, en este caso demandante, queda autorizado para ejercerla también. (Negrilla intencional).

Como se anotó en acápites anteriores, nuestro ordenamiento jurídico tiene como presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario, que la obligación asumida

por varias personas les interesa a todas, por tanto, se entiende que cada una está obligada a su pago por partes iguales; en consecuencia, como en este caso los títulos valores fueron suscritos en forma solidaria por dos personas, en este caso la ejecución procedía, en principio, por el 50% de la obligación adquirida en los cinco pagarés, los cuales valga anotar, cumplen con los requisitos generales o comunes y especiales establecidos en los artículos 621 y 709 del C. de Comercio.

En esa medida, Rafael Mario Villa Moreno no se podía beneficiar de la exclusión de solidaridad contemplada en el artículo 1579 inciso 2 del Código Civil, por cuanto, de conformidad con lo probado en el expediente, el señor Villa Moreno sí se benefició de los pagarés objeto del proceso.

Aun cuando Rafael Mario Villa Moreno no hubiera recibido un solo peso del dinero prestado por Luis Fernando Vásquez Botero y Vásquez García e Hijos S.A.S., esos rubros tuvieron como propósito cubrir parte del pasivo que tenía la empresa Solución Maestra S.A.S., de la cual era socio el apelante, tal y como se reconoció en los reparos y sustentación de la apelación.

Es decir, la obligación solidaria contenida en los títulos valores pagados por Carlos Arturo González Villa sí le concernía al señor Villa Moreno, quien sí se benefició indirectamente de ella, por ende, debía reconocer al otro deudor solidario, ahora acreedor por subrogación, la parte que este pagó en exceso.

Así las cosas, examinados los documentos arrimados como base de recaudo, se colige que no existen dudas sobre la claridad de los mismos, específicamente en el monto de la obligación, puesto que es evidente, como ya se dijo, que lo cobrado sería el 50% de su importe, de acuerdo a la configuración de la subrogación, ante el pago realizado por uno de los deudores solidarios.

De otro lado, alega la parte recurrente en su alzada que no se justipreció la prueba consistente es que el ejecutante envió todo el dinero que le fue entregado a cambio de los pagarés, a la sociedad Solución Maestra, queriendo indicar que no obtuvo beneficio alguno del crédito otorgado.

Y en efecto, tratándose de una presunción, era factible, se repite, que el ejecutado, a través de cualquier medio probatorio la desvirtuara; sin embargo, no arrimó pruebas para tal efecto. Así, es a quien alega la excepción de mérito para desvirtuar la

ejecución, a quien corresponde la carga de probar fundamentos fácticos que soportan su defensa. Lo indica el artículo 167 citado cuando señala “*Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”. Carga que no cumplió la parte demandada.

Por el contrario, de las pruebas practicadas dentro del expediente, concretamente la testimonial solicitada por la parte actora, se confirma que el crédito contentivo en los pagarés objeto de ejecución, fue adquirido por lo señores Carlos Arturo González Villa y Rafael Mario Villa Moreno, con el fin de capitalizar la empresa que ambos tenían de adquisición de libranzas. El señor Andrés Vásquez fue claro y contundente en afirmar que se reunió con los deudores previo al otorgamiento de los títulos valores, y que tuvo conocimiento de aquel destino de los dineros entregados en calidad de préstamo.

3. CONCLUSIÓN.

Conforme lo analizado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por la parte apelante no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, por las razones aquí esgrimidas, y se condenará en costas al ejecutado.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, el 15 de julio de 2021, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por CARLOS ARTURO GONZÁLEZ VILLA, en contra de RAFAEL MARIO VILLA MORENO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, esto es, DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL

PESOS M.L. (\$2.320.000). Liquídense en primera instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente digital a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA
Magistrada

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

NATTAN NISIMBLAT MURILLO
Magistrado

Firmado Por:

Alba Lucia Goyeneche Guevara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Nattan Nisimblat Murillo
Magistrado
Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **34305cc8eb05326032c601401e59c777b9f9b3df7bfd6c161bdd43d329d9f289**

Documento generado en 23/08/2023 04:40:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>